

La advertencia militar

Fernando Reinlein

Las últimas declaraciones de la jerarquía militar como consecuencia del asesinato de un general, de un coronel y un comandante del Ejército en Euskadi, van mucho más allá de la condena para entrar de lleno en el terreno de la advertencia.

El denominador común de todas ellas está representado por la crítica a la acción gubernamental en cuanto a las soluciones, que no llegan, al problema del terrorismo en el País Vasco. Y es la primera vez que la jerarquía militar se muestra tan contundente.

Hay indicios más que suficientes para pensar que, en esta ocasión, las críticas de los militares a la acción gubernamental en este tema, coinciden con la gran mayoría de los españoles, sea cual sea su filiación política. Porque todos se preguntan hasta cuándo una organización terrorista minoritaria —aunque posiblemente sea hoy día la más importante del mundo— puede seguir actuando con la impunidad con que ETA lo hace en el País Vasco. Y aquí las comparaciones con otros países no llegan ni al nivel del consuelo.

Cierto es que las acciones y actitudes presumibles en muchos militares para resolver el problema y la de otros sectores de la sociedad no serán coincidentes. Pero no se trata ahora de analizar ese fenómeno, sino de señalar la conexión entre lo dicho por el mando militar y lo sentido por unos ciudadanos cada vez más desconfiados en cuanto a la solución del problema por parte del Gobierno, e incluso del sistema.

Aunque en las declaraciones de la jerarquía militar se cuida escrupulosamente de manifestar la primacía del poder civil sobre el militar y el acatamiento a la Constitución, estas declaraciones son una seria advertencia al Gobierno que caso de prestar oídos sordos a lo que implican, incurrirá en una grave irresponsabilidad.

Preguntas sin respuesta

Porque los militares se hacen muchas preguntas y no hallan respuesta. Y también aquellos secto-

res del Ejército que no sólo aceptaron, sino que asumieron la democracia para España.

Las acciones de ETA son la respuesta a la culminación de las medidas políticas en el tema vasco: el próximo referéndum para el Estatuto de autonomía. Podría aducirse y de hecho no faltan sectores que con sus razones lo hacen, que esta culminación ha llegado con retraso y con cierta cicatería por parte del poder, que podría haber evitado muchos acontecimientos con otro calendario más generoso.

Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de los representantes vascos han aceptado el Estatuto como instrumento indispensable para la pacificación de un pueblo duramente castigado desde hace años y para conseguir que «el tema vasco» deje de ser un posible motivo que haga inviable la nueva andadura de España.

ETA, sin embargo, sigue golpeando, precisamente para provocar una reacción que la haga recuperar el máximo apoyo popular y la justificación para su lucha. Y golpea duramente a la institución militar, que si bien ha aceptado la democracia para España, cuenta en su seno con importantes sectores que no la han asumido.

Neutralidad militar

Una vez aprobado el Estatuto por las Cortes y la Asamblea vasca, ¿qué hace el Gobierno y los partidos para acabar con ETA?, se preguntan los militares mientras ven como siguen siendo objetivo principal, junto a las Fuerzas de Orden Público, de los ataques terroristas. Pregunta que, de otro lado, no es exclusiva del estamento militar.

Esta advertencia de la jerarquía militar a raíz de los últimos acontecimientos debe ser tenida en cuenta por el Gobierno. Las Fuerzas Armadas españolas, procedentes de un régimen de signo totalmente distinto al actual, que han sufrido una mínima transformación para adecuarlas a los nuevos presupuestos democráticos, han colaborado, sin embargo, con su

neutralidad y su silencio desde hace cuatro años a hacer posible la transición. Y al pensar que son las mismas personas y estructuras que defendieron y apoyaron el régimen anterior las que han prestado esta colaboración, su actitud merece más aún el elogio y el agradecimiento de la mayoría del pueblo español.

Pero esta realidad encierra en sí misma una contradicción que no puede hurtarse, porque la capacidad de aguante de la institución puede llegar a tener un límite —y aparecen indicios de que este límite cada vez está más cerca— si no se toman medidas urgentes en dos direcciones.

La primera y más importante es una respuesta por parte del Gobierno y de toda la oposición al fenómeno terrorista. Una respuesta con imaginación en la cual las medidas policiales energéticas, respetando las libertades fundamentales, se hace imprescindible. Medidas policiales eficaces que los técnicos, al servicio de la voluntad política de llevarlas a cabo, pueden encontrar. Medidas policiales que, unidas a una llamada a la conciencia popular para que todos nos convirtamos en enemigos activos del terrorismo, no serían en absoluto rechazadas por el cuerpo social. ¿Qué se ha hecho en este sentido? ¿Existe una estrategia global anti-ETA? Y si así. ¿Está el ministro del Interior capacitado y dispuesto a llevarla a cabo?

Pero hay una segunda cuestión. La educación de las Fuerzas Armadas a situaciones como las que atraviesa la sociedad española no es fácil, pero sí absolutamente necesaria. La democracia tiene, se ha dicho ininidad de veces no sólo el derecho, sino el deber de defenderse. Y la contradicción que representa la marginación de los demócratas dentro del estamento militar es una realidad más que representa un grave riesgo para la futura convivencia de los españoles. Mientras tanto los que no han asumido la democracia y a duras penas la han aceptado, campean por sus respetos.